



Asamblea General

Distr. general
11 de mayo de 2022
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 93^{er} período de sesiones, 30 de marzo a 8 de abril de 2022

Opinión núm. 9/2022, relativa a Wang Jianbing (China)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo¹, el Grupo de Trabajo transmitió el 28 de diciembre de 2021 al Gobierno de China una comunicación relativa a Wang Jianbing. El Gobierno respondió a la comunicación el 27 de enero de 2022. El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,

¹ [A/HRC/36/38](#).



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Wang Jianbing, nacido en 1983, es ciudadano de China, residente en Guangzhou, provincia de Guangdong (China).

5. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que el Sr. Wang es un activista independiente en defensa de los derechos laborales y de las personas con discapacidad. Desde 2018, ha proporcionado apoyo legal y comunitario a antiguos trabajadores de la construcción que han contraído enfermedades crónicas, como la neumoconiosis, como resultado de su exposición a condiciones de trabajo precarias. Según la fuente, se trata de un problema generalizado en el sector de la construcción del país. El Sr. Wang también ha trabajado en apoyo al movimiento #MeToo en China. Además, ha consagrado una gran parte de su carrera al sector sin fines de lucro, trabajando en las esferas de la educación de los jóvenes, el desarrollo de las zonas rurales y el apoyo a las personas con discapacidad.

6. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que el 19 de septiembre de 2021, alrededor de las 15.00 horas, agentes de la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou detuvieron al Sr. Wang en su residencia alquilada, situada en Guangzhou, y lo sometieron a desaparición forzosa y reclusión. El Sr. Wang fue detenido, al parecer, junto con una amiga. También se incautaron algunas de sus pertenencias personales. Se desconoce si las autoridades mostraron una orden judicial al Sr. Wang en el momento de su detención.

7. Además, según la información recibida, se cambió la cerradura y se retiró la cámara de seguridad de la puerta principal de su residencia. El 20 de septiembre de 2021, agentes de los servicios policiales de Guangzhou y la policía local de Gansu se dirigieron a los familiares del Sr. Wang y presuntamente les indicaron que no pidieran ayuda a terceros. No proporcionaron ninguna información sobre la detención del Sr. Wang ni sobre ninguna de las medidas coercitivas a las que estaba sometido. Las autoridades también se negaron a proporcionar a su familia ninguna notificación formal de la detención en ese momento.

8. El 5 de noviembre de 2021, las autoridades entregaron a la familia del Sr. Wang una notificación escrita en la que se indicaba que había sido detenido el 27 de octubre. Por lo tanto, entre el 19 de septiembre y el 27 de octubre de 2021, el Sr. Wang estuvo sometido a desaparición forzosa y reclusión. La fuente destaca el hecho de que el Sr. Wang permaneció en paradero desconocido hasta el 5 de noviembre de 2021, fecha en que su familia recibió la notificación oficial de detención.

9. Antes de recibir la notificación, entre el 28 y el 30 de septiembre de 2021, la familia del Sr. Wang visitó todas las instancias de la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou para solicitar información sobre su caso. El 28 de septiembre, en la comisaría de Xingang, distrito de Haizhu, se les informó finalmente de que el Sr. Wang había sido detenido por la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou. Sin embargo, los agentes de la policía de Xingang se negaron a decir a la familia cuál era el departamento responsable de tramitar el caso, la acusación concreta, las medidas coercitivas que se habían aplicado o el lugar en el que permanecía recluso el Sr. Wang.

10. Durante el mismo período, entre el 28 y el 30 de septiembre de 2021, la familia del Sr. Wang presentó denuncias en varias oficinas de la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou, así como ante la Procuraduría de Guangzhou. En sus denuncias, informaban de las violaciones de la legislación nacional llevadas a cabo por la policía y los departamentos de seguridad pública al no informar a los familiares de los cargos presentados contra el Sr. Wang ni de las medidas coercitivas a las que estaba sometido. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta oficial a estas denuncias.

11. La fuente procede a explicar que, según la notificación oficial de detención presentada a la familia del Sr. Wang el 5 de noviembre de 2021, el Sr. Wang estaba recluso en el centro de detención núm. 1 de Guangzhou. Sin embargo, según la fuente, el nombre y el número de identificación del Sr. Wang no figuran en el sistema en línea del centro de detención para el

depósito de fondos para los detenidos, lo que suscita dudas sobre si se encuentra realmente recluido en ese lugar.

12. El motivo de la detención esgrimido por las autoridades es, según la fuente, “incitar a la subversión contra la autoridad del Estado”. El fundamento jurídico para la detención, en particular la legislación pertinente aplicada, es el artículo 105, párrafo 2, del Código Penal de China (2020), que dispone que toda persona que incite a otras, mediante la difusión de rumores o calumnias o por cualquier otro medio, a subvertir el poder del Estado o derrocar el sistema socialista será condenada a una pena de prisión no superior a cinco años, detención penal, vigilancia pública o privación de sus derechos políticos; y los cabecillas y demás personas que cometan delitos graves serán castigados con una pena de prisión no inferior a cinco años. La fuente añade que se considera un delito contra la seguridad nacional.

13. La fuente informa de que las autoridades no han revelado qué medidas coercitivas aplicaron para mantener retenido al Sr. Wang antes de su detención oficial el 27 de octubre de 2021. Además, permanece en régimen de incomunicación incluso después de que su familia recibiera una notificación oficial de detención el 5 de noviembre.

14. Según la fuente, es posible que el Sr. Wang haya estado recluido en el centro de detención núm. 1 de Guangzhou durante todo este tiempo. Esta cita el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Penal de China (2018), que estipula que las autoridades policiales pueden detener a alguien hasta 30 días antes de presentar el caso de detención a la Procuraduría. La Procuraduría tiene siete días para aprobar la detención.

15. La fuente señala que también es posible que el Sr. Wang permaneciese bajo vigilancia domiciliaria en un lugar designado antes de ser detenido oficialmente. En virtud de los artículos 74 a 79 de la Ley de Procedimiento Penal, si una persona es sospechosa de cometer delitos contra la seguridad nacional, incluida la “incitación a la subversión contra la autoridad del Estado”, las autoridades pueden mantenerla bajo vigilancia domiciliaria en un lugar designado. La fuente afirma que la vigilancia residencial en un lugar designado es una forma de detención en régimen de incomunicación, y que las personas sometidas a ella pueden pasar hasta seis meses sin acceso a un abogado.

16. La fuente alega que, aunque las autoridades se han negado a proporcionar información sobre la base probatoria de las acusaciones contra el Sr. Wang, este ha sido perseguido por celebrar reuniones sociales informales en su apartamento. Se ha informado de que, en los meses transcurridos desde la fecha en que el Sr. Wang fue objeto de desaparición forzada, más de 40 personas han sido hostigadas, citadas, interrogadas y obligadas a firmar declaraciones falsas sobre él por la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou y otras oficinas de seguridad pública de todo el país.

17. En el curso de estos interrogatorios, las autoridades presuntamente descargaron el contenido de los teléfonos inteligentes de particulares para su investigación presionándoles para que firmaran testimonios inventados en los que se afirmaba que, durante las reuniones, los participantes habían discutido temas delicados desde el punto de vista político. La fuente afirma que los testimonios se obtuvieron bajo coacción y que se utilizarán como prueba para respaldar la acusación de incitación a la subversión contra la autoridad del Estado que pesa sobre el Sr. Wang. La fuente informa de que, en realidad, las personas que participaban en las reuniones que organizaba el Sr. Wang se limitaban a hablar de su vida cotidiana, prestarse apoyo emocional y compartir ideas sobre causas benéficas y arte, y sus conversaciones rara vez tocaban temas políticos.

18. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que, hasta la fecha, no se ha concedido al Sr. Wang la posibilidad de acceder a su familia o a su abogado.

19. El 21 de octubre de 2021, la familia del Sr. Wang y el abogado elegido por esta presentaron una solicitud a la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou para que el abogado fuera designado como defensor del Sr. Wang y se le permitiera reunirse con su cliente. Al parecer, los funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública se negaron a aceptar al abogado elegido por la familia del Sr. Wang indicando que necesitaban tiempo para verificar la autenticidad de la documentación presentada.

20. El 19 de noviembre de 2021, los funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou rechazaron las solicitudes del abogado de reunirse con el Sr. Wang y de que se concediese al Sr. Wang la libertad bajo fianza. La fuente señala que, en su respuesta, las autoridades no plantearon dudas sobre la autenticidad de los documentos que demostraban que el abogado actuaba en representación del Sr. Wang. Tampoco se ha permitido a los familiares del Sr. Wang reunirse con él desde que fue detenido.

21. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Wang se inscribe en las categorías I, II y III de detención arbitraria a las que se refiere el Grupo de Trabajo cuando examina los casos que se someten a su consideración. En relación con la categoría I, la fuente afirma que la detención del Sr. Wang no está autorizada por la Constitución ni por la legislación nacional. Por lo tanto, se afirma que las circunstancias relacionadas con la desaparición y reclusión del Sr. Wang constituyen una privación de libertad, que carece de fundamento jurídico tanto en la Constitución como en la legislación nacional.

22. La fuente explica que la detención del Sr. Wang viola el artículo 35 de la Constitución, que garantiza los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Se argumenta que el Sr. Wang ejerció estos derechos al reunirse pacíficamente con amigos en su casa para conversar libremente y que las acciones de las autoridades al detener al Sr. Wang por celebrar esas reuniones no tienen fundamento constitucional.

23. Además, la fuente señala que el artículo 105, párrafo 2, del Código Penal, en virtud del cual se ha acusado al Sr. Wang, está redactado de forma demasiado amplia como para servir de fundamento jurídico para la detención. Según la notificación oficial de detención, el Sr. Wang está siendo investigado por incitación a la subversión contra la autoridad del Estado. La fuente recuerda que el Grupo de Trabajo, en su opinión núm. 11/2020, indicó que esta disposición estaba redactada en términos tan generales e imprecisos que podía invocarse para privar a las personas de su libertad sin un fundamento jurídico específico y vulneraba las debidas garantías procesales respaldadas por el principio de legalidad en el artículo 11, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

24. Según la fuente, la ley nacional citada para justificar la detención del Sr. Wang es demasiado vaga para aplicarse de forma específica y precisa a sus acciones, por lo que su detención carece de fundamento en la legislación nacional. La fuente concluye que la detención del Sr. Wang cumple, por tanto, las condiciones para ser considerada arbitraria con arreglo a la categoría I del Grupo de Trabajo.

25. En relación con la categoría II, la fuente afirma que la reclusión del Sr. Wang es el resultado del ejercicio de los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se afirma que las autoridades han sometido a desaparición forzada y detenido al Sr. Wang para investigarlo por celebrar reuniones sociales informales en su casa en las que trataba diversos temas aleatorios con sus amigos. La fuente concluye que, por lo tanto, las autoridades han detenido al Sr. Wang por ejercer sus derechos a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación, y que la detención del Sr. Wang cumple las condiciones de la detención arbitraria en virtud de la categoría II del Grupo de Trabajo.

26. En relación con la categoría III, la fuente afirma que las autoridades no han observado las normas internacionales relativas al derecho del Sr. Wang a un juicio imparcial. Se afirma que las autoridades han violado el derecho a las debidas garantías procesales del Sr. Wang desde el momento de su detención, en particular al no documentar su detención durante las seis primeras semanas, negarle el acceso a asistencia jurídica y, presuntamente, interrogar y coaccionar a otras personas para que hicieran declaraciones falsas e inculpativas sobre el Sr. Wang que probablemente se utilizarán como prueba para demostrar las acusaciones en su contra durante el juicio. Por lo tanto, la fuente sostiene que la reclusión del Sr. Wang, que aún continúa, viola su derecho a un juicio imparcial, garantizado por el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y cumple las condiciones de la detención arbitraria en virtud de la categoría III del Grupo de Trabajo.

Respuesta del Gobierno

27. El 28 de diciembre de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que le proporcionara, a más tardar el 28 de febrero de 2021, información detallada sobre la situación del Sr. Wang en ese momento y que aclarara las disposiciones legales que justificaban el mantenimiento de su detención, así como su compatibilidad con las obligaciones de China dimanantes del derecho internacional de los derechos humanos. Además, exhortó al Gobierno de China a que velara por la integridad física y mental del Sr. Wang.

28. El 27 de enero de 2022, el Gobierno presentó su respuesta. En ella explica que, el 19 de septiembre de 2021, las autoridades de la seguridad pública de Guangzhou, basándose en una pista, citaron legalmente al Sr. Wang (38 años de edad, del municipio de Tianshui, provincia de Gansu), como sospechoso de haber infringido la ley.

29. El Gobierno explica, además, que el 20 de septiembre de 2021, las autoridades detuvieron al Sr. Wang bajo acusaciones penales en aplicación de la legislación. El 27 de octubre, tras obtener la aprobación de la Procuraduría, se dio curso a su detención. Las autoridades de seguridad pública le notificaron este hecho a la familia del Sr. Wang y a su abogado con arreglo a las normas jurídicas. Las autoridades de seguridad pública han seguido estrictamente la Ley de Procedimiento Penal y otra legislación al enjuiciar el caso y ha garantizado la plena protección de los derechos del Sr. Wang. Las autoridades también han adoptado medidas de protección en relación con la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). El caso sigue actualmente en fase de investigación y enjuiciamiento.

Comentarios adicionales de la fuente

30. El 31 de enero de 2022, la respuesta del Gobierno se transmitió a la fuente para que formulara observaciones adicionales, que la fuente presentó el 8 de febrero de 2022.

31. En sus comentarios adicionales, la fuente sostiene que las afirmaciones del Gobierno no refutan las alegaciones presentadas, en las que se afirma que el Sr. Wang no fue detenido ni recluido legalmente. En la comunicación inicial de la fuente se explicaba que la detención del Sr. Wang era ilegal tanto en virtud de la Constitución como de la legislación nacional de China, y que el Grupo de Trabajo había considerado anteriormente que la ley en virtud de la cual se le acusaba estaba redactada de forma demasiado amplia para servir como fundamento jurídico para la detención.

32. Además, según la fuente, la afirmación del Gobierno de que se ha seguido estrictamente la Ley de Enjuiciamiento Penal queda desmentida por las numerosas cuestiones planteadas en el escrito inicial que no han sido abordadas.

33. Por lo tanto, la fuente sostiene que, puesto que no ha refutado las alegaciones específicas planteadas en la comunicación original, el Gobierno es responsable de la detención arbitraria del Sr. Wang y solicita a este que subsane las numerosas violaciones cometidas contra los derechos que lo asisten, que lo ponga en libertad de inmediato y que le ofrezca reparación por su detención ilegal.

Deliberaciones

34. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento a la fuente y al Gobierno por haber presentado sus comunicaciones en los plazos establecidos.

35. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Wang fue arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia sobre cómo proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado un caso *prima facie* de violación del derecho internacional que constituye una detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae sobre el Gobierno si desea refutar las acusaciones. La mera afirmación de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente².

² A/HRC/19/57, párr. 68.

36. La fuente ha afirmado que la detención del Sr. Wang es arbitraria y se inscribe en las categorías I, II y III establecidas por el Grupo de Trabajo. El Gobierno, aunque no hace referencia a las categorías, argumenta que la detención del Sr. Wang es legal con arreglo a la legislación nacional. El Grupo de Trabajo procederá a abordar cada una de las alegaciones por separado.

Categoría I

37. El Grupo de Trabajo recuerda que la privación de libertad se considera arbitraria conforme a la categoría I si carece de fundamento jurídico.

38. En el presente caso, el Grupo de Trabajo observa que la fuente ha afirmado que el Sr. Wang fue detenido el 19 de septiembre de 2021. Sin embargo, el Gobierno afirma que el Sr. Wang fue citado por la policía ese día, pero no detalla si la detención efectiva se produjo en esa misma fecha. No obstante, el Gobierno indica claramente que el Sr. Wang fue detenido bajo acusación penal el 20 de septiembre y especifica además que el 27 de septiembre se dio curso a su detención a petición de la fiscalía. Esto significa que, si bien el Sr. Wang fue privado de su libertad el 20 de septiembre, como afirma el Gobierno, la autorización de su detención no se emitió hasta siete días más tarde, el 27 de septiembre, y la autoridad que emitió la autorización fue la fiscalía, es decir, la Procuraduría.

39. Como ha afirmado el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo de inmediato a las circunstancias del caso mediante una orden de detención³.

40. El derecho internacional en materia de privación de libertad incluye el derecho a que la detención se efectúe presentando una orden de detención, derecho procesalmente inherente al derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y a la prohibición de la privación arbitraria de la libertad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 9, respectivamente, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en los principios 2, 4 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión⁴. Toda forma de detención o prisión deberá ser ordenada por un juez u otra autoridad establecida por la ley cuyo rango y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia, imparcialidad e independencia, o quedar sujeta a la fiscalización efectiva de tal juez o autoridad, de conformidad con el principio 4 del Conjunto de Principios. Las autoridades fiscales no cumplieron este requisito. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se han vulnerado los derechos que asisten al Sr. Wang en virtud del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

41. Además, la fuente ha alegado que el Sr. Wang fue objeto de desaparición forzada hasta el 27 de octubre de 2021, y que posteriormente permaneció recluso en régimen de incomunicación. A pesar de que esta grave acusación se le trasladó al Gobierno, este no llegó a abordarla.

42. El Grupo de Trabajo señala que estas acusaciones se refieren a la imposición de la llamada vigilancia domiciliaria en un lugar designado, que se considera una expresión poco apropiada, ya que el sospechoso o acusado que es sometido a esa medida no está confinado en su lugar de residencia habitual —es decir, bajo arresto domiciliario—, sino en un lugar de residencia designado, que bien puede ser una prisión⁵. En la práctica, las autoridades tienen la facultad de hacer desaparecer a una persona sin supervisión judicial. El Grupo de Trabajo considera que no existe fundamento jurídico para que una disposición legislativa dote de tales atribuciones a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley⁶. El Grupo de Trabajo considera que la reclusión en régimen de vigilancia domiciliaria en un lugar designado

³ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 76/2020, 35/2019, 79/2018, 35/2018, 93/2017, 75/2017, 66/2017 y 46/2017.

⁴ Véanse las opiniones núm. 30/2018, párr. 39; núm. 3/2018, párr. 43; y núm. 88/2017, párr. 27.

⁵ Véase la opinión núm. 30/2021.

⁶ Opiniones núm. 36/2019, párr. 38; y núm. 78/2020, párr. 47.

constituye una vulneración de los artículos 6, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos⁷.

43. El Grupo de Trabajo y otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales han expresado su preocupación por el hecho de que el régimen de vigilancia domiciliaria en un lugar designado se esté aplicando de un modo que vulnera los derechos humanos⁸. Las preocupaciones son las siguientes:

a) Dicha práctica, que consiste en detener a personas en régimen de incomunicación para interrogarlas durante períodos prolongados sin revelar su paradero, equivale a una detención secreta y es una forma de desaparición forzada;

b) La práctica de imponer la vigilancia domiciliaria en un lugar designado sin supervisión judicial y sin acusación formal contraviene el derecho de toda persona a no ser privada arbitrariamente de su libertad y a impugnar sin demora la legalidad de su reclusión ante un tribunal, así como el derecho de los acusados a ejercer su defensa mediante un abogado de su elección;

c) Las disposiciones relativas a la vigilancia domiciliaria en un lugar designado parecen permitir que los sospechosos de determinados delitos permanezcan recluidos en régimen de incomunicación durante largos períodos y en un lugar no desvelado, lo que en sí mismo puede equivaler a un trato o pena cruel, inhumano o degradante, o incluso a tortura, y además puede exponer a las personas afectadas a un mayor riesgo de sufrir nuevos maltratos, por ejemplo, actos de tortura;

d) Las disposiciones relativas a la vigilancia domiciliaria en un lugar designado parecen utilizarse para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de los defensores de los derechos humanos y sus representantes legales.

44. Por consiguiente, en el presente caso, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Wang fue sometido a desaparición forzada *de facto* desde el momento de su detención hasta el reconocimiento de dicha detención por las autoridades, en violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las desapariciones forzadas están prohibidas por el derecho internacional y constituyen una forma particularmente grave de reclusión arbitraria⁹. Una privación de libertad de estas características, que entraña la negativa a revelar la suerte o el paradero de las personas afectadas, o a reconocer su reclusión, carece de fundamento jurídico válido en cualquier circunstancia. También es intrínsecamente arbitraria, ya que sustrae a la persona afectada del amparo de la ley, por lo que contraviene el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo remite el caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que adopte las medidas que estime apropiadas.

45. Además, la fuente ha alegado que, después de que las autoridades reconocieran su detención, el Sr. Wang permaneció recluido en régimen de incomunicación. Una vez más, a pesar de que esta grave acusación se le presentó también al Gobierno, este no llegó a abordarla.

46. Como ha señalado sistemáticamente el Grupo de Trabajo, la detención de personas en régimen de incomunicación viola su derecho a comparecer ante un tribunal y a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁰. El Grupo de Trabajo recuerda una vez más que la supervisión judicial de la detención es una garantía fundamental de la libertad personal¹¹ y es esencial para garantizar el fundamento jurídico de la detención.

⁷ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 30/2021 y 15/2019.

⁸ Véase la comunicación CHN 15/2018, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results>. Véanse también las opiniones núm. 30/2021, párr. 52; y núm. 15/2019, párr. 42.

⁹ Véanse las opiniones núms. 5/2020, 6/2020, 11/2020 y 13/2020.

¹⁰ Véanse las opiniones núms. 36/2020, 35/2018, 11/2018, 79/2017, 46/2017 y 45/2017.

¹¹ Véanse los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, párr. 3.

47. Dado que el Sr. Wang no pudo ponerse en contacto con nadie, y especialmente con su abogado, lo cual es una salvaguardia esencial para garantizar la capacidad de toda persona detenida de impugnar personalmente su detención, se violó su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También fue sustraído de la protección de la ley, en violación de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

48. El Grupo de Trabajo recuerda además que la prisión preventiva es una medida excepcional y que solo debe utilizarse excepcionalmente, por un período de tiempo reducido, tras una evaluación individualizada por parte del poder judicial de que la persona en cuestión debe permanecer en prisión preventiva por razones como el riesgo de fuga o la interferencia con la investigación. Este no fue el caso del Sr. Wang y, por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que su prisión preventiva también vulneró los derechos que le asisten en virtud del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para llegar a esta determinación, el Grupo de Trabajo tiene particularmente en cuenta sus conclusiones con respecto a la categoría II, que se presentan a continuación.

49. Por último, el Grupo de Trabajo toma nota de que la fuente ha afirmado que el Sr. Wang está acusado de incitación a la subversión contra la autoridad del Estado, sobre la base del artículo 105, párrafo 2, del Código Penal. El Gobierno, aun teniendo la oportunidad de hacerlo, no ha respondido a esta alegación. El Grupo de Trabajo recuerda que ya se le ha pedido que examine el artículo 105, párrafo 2, del Código Penal anteriormente en varias ocasiones¹².

50. Tras sus visitas a China en 1997 y 2004, el Grupo de Trabajo subrayó en sus informes que las acusaciones por delitos vagos e imprecisos ponían en peligro la capacidad de las personas para ejercer sus derechos fundamentales y podían dar lugar a una privación de libertad arbitraria. Recomendó que esos delitos se definieran en términos precisos y que se adoptaran medidas legislativas para eximir de responsabilidad penal a las personas que ejercieran pacíficamente sus derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos¹³.

51. El Grupo de Trabajo ha establecido que el principio de legalidad requiere que las normas se formulen con suficiente precisión para que el individuo pueda acceder y comprender la ley, y regular su conducta en consecuencia¹⁴. El Grupo de Trabajo ya había pedido al Gobierno que derogara el artículo 105, párrafo 2, del Código Penal o que lo pusiera en consonancia con sus obligaciones dimanantes del derecho internacional de los derechos humanos¹⁵, pero las circunstancias del presente caso demuestran que esto no se ha realizado.

52. En el presente caso, el Sr. Wang ha sido acusado de un delito vago e impreciso de incitación a la subversión contra la autoridad del Estado en virtud del artículo 105, párrafo 2, del Código Penal¹⁶. Esta disposición no define qué conducta equivale a la subversión o el derrocamiento del sistema socialista mediante rumores, calumnias u otros medios. Dentro de la conducta prohibida podría incluirse la comunicación de simples pensamientos, ideas u opiniones.

53. Además, la determinación de si se ha cometido un delito parece dejarse íntegramente al arbitrio de las autoridades. El Gobierno no ha explicado en qué sentido puede considerarse que la conducta del Sr. Wang haya incitado a la subversión y al derrocamiento del sistema socialista. Es importante señalar que no hay nada que indique que el Sr. Wang cometiera o incitara a cometer actos de violencia en el marco de sus actividades, lo que pudiera haber hecho necesario restringir su comportamiento.

¹² Véanse las opiniones núms. 66/2021, 82/2020 y 15/2019.

¹³ E/CN.4/1998/44/Add.2, párrs. 42 a 53, 106, 107 y 109 c); y E/CN.4/2005/6/Add.4, párrs. 73 y 78 e).

¹⁴ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101.

¹⁵ Opiniones núm. 15/2019, párr. 35; y núm. 82/2020, párrs. 48 a 52;

¹⁶ Véase también A/HRC/48/55, párr. 48.

54. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y posterior reclusión del Sr. Wang en aplicación del artículo 105, párrafo 2, del Código Penal fueron arbitrarias y vulneran el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo llega a esta conclusión debido a que el artículo 105, párrafo 2, del Código Penal no cumple el principio de legalidad. El Grupo de Trabajo ya había pedido al Gobierno que derogara el artículo 105, párrafo 2, del Código Penal o que lo pusiera en consonancia con sus obligaciones dimanantes del derecho internacional de los derechos humanos.

55. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Wang es arbitraria y se inscribe en la categoría I, ya que carece de fundamento jurídico.

Categoría II

56. La fuente ha alegado que la detención del Sr. Wang viola sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y asociación pacíficas recogidos en los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se argumenta que el Sr. Wang ejerció estos derechos al reunirse pacíficamente con amigos en su casa para conversar libremente y que las acciones de las autoridades al detener al Sr. Wang por celebrar esas reuniones no tienen fundamento.

57. El Grupo de Trabajo señala que, a pesar de que el Gobierno tuvo la oportunidad de responder a estas alegaciones, ha decidido no hacerlo. Resulta significativo que el Gobierno no haya proporcionado ninguna razón específica para la detención y privación de libertad del Sr. Wang y que no aporte ninguna indicación sobre qué acciones del Sr. Wang llevaron a su detención.

58. El Grupo de Trabajo recuerda que la privación de libertad por el mero ejercicio pacífico de los derechos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos puede ser arbitraria¹⁷. Además, en su resolución 24/5, el Consejo recordó a los Estados su obligación de respetar y proteger plenamente los derechos de todas las personas a la libertad de reunión pacífica y de asociación por cualquier vía, electrónica o no, también en el contexto de unas elecciones, incluidas las personas que abracen opiniones o creencias minoritarias o disidentes¹⁸. Esto coincide con el principio enunciado en la resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo exhortó a los Estados a que se abstuvieran de imponer restricciones que no fueran compatibles con el artículo 19, párrafo 3, del Pacto, en particular a la discusión de las políticas del gobierno y el debate político; la información sobre los derechos humanos; la participación en manifestaciones pacíficas o actividades políticas, en pro de la paz y la democracia, en particular; y la expresión de opiniones o discrepancias, ideas religiosas o creencias.

59. El Grupo de Trabajo recuerda que la libertad de opinión y la libertad de expresión, según lo enunciado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona; son fundamentales para toda sociedad y de hecho constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas¹⁹. La libertad de expresión comprende el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin limitación de fronteras, y este derecho incluye la expresión y recepción de comunicaciones sobre toda clase de ideas y opiniones que puedan transmitirse a otros, entre ellas, las opiniones políticas.

60. Del mismo modo, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, asiste a todas las personas, al igual que el derecho a la libertad de reunión y asociación, protegido por el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

61. En lo que respecta a todos esos derechos, el Grupo de Trabajo recuerda que el artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que las únicas limitaciones legítimas al ejercicio de los derechos y libertades de una persona deben

¹⁷ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 66/2021.

¹⁸ Véanse las opiniones núms. 45/2017, 46/2017, 79/2017, 11/2018, 35/2018 y 36/2020

¹⁹ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 50/2021.

ceñirse al fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

62. No obstante, las limitaciones a esos derechos y libertades que se permiten en virtud del artículo 29, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos no son aplicables en el presente caso. El Gobierno no presentó al Grupo de Trabajo ningún argumento o prueba que justificara la invocación de ninguna de esas limitaciones, ni explicó el modo en que la imputación del Sr. Wang constituía una respuesta legítima, necesaria y proporcionada a sus actividades pacíficas.

63. En particular, al Grupo de Trabajo no se le ha presentado ninguna prueba de que las acciones o expresiones del Sr. Wang hayan incitado a la violencia o a los disturbios. Por el contrario, parecen inscribirse firmemente en las libertades protegidas en virtud de los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y reclusión del Sr. Wang fue consecuencia de su ejercicio de los derechos y libertades garantizados por los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por lo tanto, se inscribe en la categoría II.

Categoría III

64. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Wang es arbitraria y se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo desea hacer hincapié en que el Sr. Wang no tendría que ser juzgado. No obstante, las actuaciones judiciales contra él siguen su curso, según ha confirmado el Gobierno, por lo que el Grupo de Trabajo procederá a examinar las alegaciones en relación con la categoría III.

65. La fuente ha alegado que al Sr. Wang se le ha negado la asistencia jurídica desde el momento de su detención, que no tuvo conocimiento de las acusaciones hasta meses después de su reclusión y que se está coaccionando a otras personas para que testifiquen en su contra. Aunque todas estas alegaciones fueron presentadas al Gobierno, este ha optado por no abordarlas y se ha limitado a afirmar que la familia y el abogado del Sr. Wang fueron informados de los cargos que se le imputan y que todos los procedimientos se llevan a cabo en estricto cumplimiento de la legislación nacional.

66. A la luz de lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que al Sr. Wang se le denegó el derecho a la asistencia jurídica en violación de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su reclusión, en particular inmediatamente después de su detención, y ese acceso debe facilitarse sin demora²⁰. El derecho a la asistencia jurídica es un elemento esencial del derecho a un juicio imparcial, ya que sirve para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de medios procesales²¹.

67. El hecho de que las autoridades no notificaran con prontitud al Sr. Wang los cargos que se le imputaban también violó su derecho a un juicio imparcial en virtud de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que en consecuencia el Sr. Wang no pudo preparar su defensa. Además, el Grupo de Trabajo aprecia una nueva vulneración de estas disposiciones en las alegaciones no refutadas de que se está coaccionando a personas para que testifiquen contra el Sr. Wang.

68. Teniendo esto en cuenta, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y la reclusión del Sr. Wang fue arbitraria y se inscribe en la categoría III.

69. Con todas estas constataciones, el Grupo de Trabajo desea abordar el argumento planteado por el Gobierno en su respuesta, según el cual la detención y reclusión del Sr. Wang se ha llevado a cabo en estricto cumplimiento de la legislación y los procedimientos

²⁰ A/HRC/45/16, párrs. 51 y 52; y Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 9 y directriz 8. Véanse también los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, párrs. 16 a 22.

²¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 35/2019 y 76/2021.

nacionales. El mandato del Grupo de Trabajo no lo faculta para revisar si se han cumplido los requisitos jurídicos nacionales. Más bien, el mandato del Grupo de Trabajo lo faculta para examinar si se han cumplido debidamente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, en este sentido, las afirmaciones del Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no son suficientes²². El argumento de que se ha respetado la legislación nacional no puede aceptarse nunca como excusa para no cumplir las obligaciones internacionales del Gobierno en materia de derechos humanos.

Observaciones finales

70. Al Grupo de Trabajo le preocupan las alegaciones no refutadas de que el Sr. Wang permanece recluido en régimen de incomunicación y que se le ha negado todo contacto con su familia. El Grupo de Trabajo considera que esto vulnera las reglas 43, párr. 3, y 58, párr. 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y los principios 15, 16, párrafo 1, y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.

71. En sus 30 años de historia, el Grupo de Trabajo ha determinado que China ha vulnerado sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en numerosos casos²³. Le preocupa que esto indique la existencia de un problema sistémico en relación con la detención arbitraria en China, que constituye una grave vulneración del derecho internacional. El Grupo de Trabajo recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras situaciones graves de privación de libertad que vulneren las normas de derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad²⁴.

72. Por último, el Grupo de Trabajo agradecería la oportunidad de realizar una visita a China para ayudar al Gobierno a abordar la cuestión de la privación arbitraria de la libertad. Dado que ha transcurrido bastante tiempo desde que realizara sendas visitas a China en octubre de 1997 y septiembre de 2004, el Grupo de Trabajo considera que puede ser un momento idóneo para realizar otra. El Grupo de Trabajo recuerda que el 15 de abril de 2015 cursó una solicitud para visitar el país y confía en recibir una respuesta afirmativa.

Decisión

73. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Wang Jianbing es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I, II y III.

²² A/HRC/19/57, párr. 68.

²³ Véanse las decisiones núm. 43/1993, núm. 44/1993, núm. 53/1993, núm. 63/1993, núm. 65/1993, núm. 66/1993, núm. 46/1995 y núm. 19/1996; y las opiniones núm. 30/1998, núm. 1/1999, núm. 2/1999, núm. 16/1999, núm. 17/1999, núm. 19/1999, núm. 21/1999, núm. 8/2000, núm. 14/2000, núm. 19/2000, núm. 28/2000, núm. 30/2000, núm. 35/2000, núm. 36/2000, núm. 7/2001, núm. 8/2001, núm. 20/2001, núm. 1/2002, núm. 5/2002, núm. 15/2002, núm. 2/2003, núm. 7/2003, núm. 10/2003, núm. 12/2003, núm. 13/2003, núm. 21/2003, núm. 23/2003, núm. 25/2003, núm. 26/2003, núm. 14/2004, núm. 15/2004, núm. 24/2004, núm. 17/2005, núm. 20/2005, núm. 32/2005, núm. 33/2005, núm. 38/2005, núm. 43/2005, núm. 11/2006, núm. 27/2006, núm. 41/2006, núm. 47/2006, núm. 32/2007, núm. 33/2007, núm. 36/2007, núm. 21/2008, núm. 29/2008, núm. 26/2010, núm. 29/2010, núm. 15/2011, núm. 16/2011, núm. 23/2011, núm. 29/2011, núm. 7/2012, núm. 29/2012, núm. 36/2012, núm. 51/2012, núm. 59/2012, núm. 2/2014, núm. 3/2014, núm. 4/2014, núm. 8/2014, núm. 21/2014, núm. 49/2014, núm. 55/2014, núm. 3/2015, núm. 39/2015, núm. 11/2016, núm. 12/2016, núm. 30/2016, núm. 43/2016, núm. 46/2016, núm. 4/2017, núm. 5/2017, núm. 59/2017, núm. 69/2017, núm. 81/2017, núm. 22/2018, núm. 54/2018, núm. 62/2018, núm. 15/2019, núm. 36/2019, núm. 72/2019, núm. 76/2019, núm. 11/2020, núm. 32/2020, núm. 78/2020, núm. 82/2020, núm. 25/2021 y núm. 30/2021.

²⁴ Opiniones núm. 1/2011, párr. 21; núm. 37/2011, párr. 15; núm. 38/2011, párr. 16; núm. 39/2011, párr. 17; núm. 4/2012, párr. 26; núm. 38/2012, párr. 33; núm. 47/2012, párrs. 19 y 22; núm. 50/2012, párr. 27; núm. 60/2012, párr. 21; y núm. 35/2019, párr. 65.

74. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de China que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Wang sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

75. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Wang inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia de COVID-19 y de la amenaza que supone en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para asegurar la puesta en libertad inmediata e incondicional del Sr. Wang.

76. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Wang y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

77. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que armonice su legislación, en particular el artículo 105, párrafo 2, del Código Penal, con las recomendaciones formuladas en la presente opinión y con los compromisos contraídos por China en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

78. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que tome las medidas correspondientes.

79. El Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno que se adhiera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

80. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

81. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Wang y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Wang;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Wang y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de China con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

82. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

83. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

84. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado²⁵.

[Aprobada el 31 de marzo de 2022]

²⁵ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.